



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE SALTA 2

2569/2020

ROVELLA CARRANZA SA c/ MUNICIPALIDAD DE LA
MERCED s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE
DERECHO

Salta, 26 de agosto de 2.022.

AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia en este Expte. FSA Nro. 2569/2020, caratulado **“Rovella Carranza S.A. c/ Municipalidad de la Merced s/ Acción Meramente Declarativa de Derecho”**, del que

RESULTA:

I.- Que a fs. 75/113 el representante de la sociedad Rovella Carranza S.A. interpuso acción declarativa de certeza en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en contra de la Municipalidad de La Merced, con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de la pretensión fiscal de la demandada de aplicar la contribución que incide sobre los contratos de obras públicas -regulada en el art. 233 del Código Tributario Municipal y en el art. 99 de la Ordenanza Municipal N° 33/96- a la actividad que desarrolla la firma en el ejido municipal, en el marco del programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, que consiste en la construcción de una estación transformadora, cuya ejecución le fuera encomendada por el Estado Nacional, mediante la suscripción del contrato celebrado el 27 de febrero de 2019.



Señaló que tal pretensión fiscal contraviene las exenciones fiscales que resultan aplicables a dicha actividad de conformidad con el régimen federal de energía eléctrica dado por las leyes 15.336, 24.065 y 25.822, sancionadas por el Congreso Nacional de acuerdo a las atribuciones y facultades reconocidas por el artículo 75, incisos 13, 18, 19 y 31 de la Constitución Nacional.

Al referirse a la competencia, sostuvo que la cuestión bajo examen tiene un innegable carácter federal, ya que se trata de dirimir si el municipio demandado viola el régimen federal de energía eléctrica, invadiendo competencias del Estado Nacional, al pretender aplicar a la firma un impuesto disfrazado de tasa en relación con la actividad que desarrolla en el marco de la ejecución de la obra pública denominada “Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Estación Transformadora San Agustín 132/33/13,2 KV, Provincia de Salta”. Invocó diversos fallos en apoyo a sus afirmaciones.

A continuación, hizo referencia a los antecedentes del caso, expresando que Rovella Carranza es una empresa de reconocida trayectoria en la actividad de la construcción, particularmente en el sector de la obra pública, ámbito en el cual ha participado en la gestión y ejecución de proyectos y obras de ingeniería trascendentales para el desarrollo vial, hidroeléctrico, energético e hídrico de nuestro país.

Mencionó que en el marco de esa actividad, en fecha 27 de febrero de 2.019 su mandante celebró un contrato con el Estado Nacional, mediante el cual se comprometió a ejecutar la obra “LPN N° PFGP-20 LPN-O: Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Estación Transformadora San Agustín 132/33/13,2 KV, Provincia de Salta”.





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE SALTA 2

Indicó que por la correcta ejecución de aquella obra, el Estado Nacional se comprometió a abonar una suma de \$ 222.499.581,39.

Consideró importante remarcar que esa obra se enmarca dentro de los objetivos trazados por el Congreso Nacional mediante la sanción de la ley 25.822, que en su art. 1º ratificó y estableció como de realización prioritaria el “Plan Federal de Transporte Eléctrico”, cuyo espíritu y finalidad encuentra concreción en el “Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial”.

Asimismo, refirió que dicha obra es el resultado del programa de políticas públicas que tiene por objetivo la ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica por distribución troncal en aras de incrementar la eficiencia y confiabilidad del abastecimiento eléctrico en las distintas regiones del sistema eléctrico de nuestro país. Agregó que la misma persigue la alta finalidad de recuperar la capacidad de transmisión de energía eléctrica a nivel provincial, y aumentar la eficiencia y confiabilidad del sistema de transmisión y distribución.

Hizo alusión al marco normativo federal aplicable a la actividad que desarrolla la empresa en la Municipalidad de La Merced. Puntualmente, hizo referencia al marco regulado por las leyes nros. 15.336, 24.065 y 25.822.

Más adelante, relató que con fecha 10/07/2019, Rovella Carranza presentó una nota ante el Municipio solicitando la pertinente habilitación para proceder a instalar un obrador de manera transitoria, durante el plazo de ejecución. Acotó que en dicha presentación se hizo saber que el mentado proyecto de obra pública -en cuanto forma parte del sistema argentino de interconexión de energía eléctrica- se encuentra exento de todo tributo local que



interfiera en su materialización, en virtud de lo dispuesto por el art. 12° de la ley 15.336.

Destacó que el Municipio no desconoció que resulta de aplicación a este caso el régimen de la ley 15.336, sino que su pretensión se limitó a negarle operatividad a dicha franquicia fiscal por entender que se trata del cobro de una tasa, y que por esa razón no resultaría aplicable la mentada exención.

Dijo que con tal entendimiento, el 03/09/2019 la demandada emitió una resolución intimando a la firma a ingresar la contribución que incide sobre los contratos de obras públicas, cuyo importe asciende a la suma de \$ 1.112.497,91, correspondiente al 5% del valor del contrato; por tal motivo, el 18/12/2019 su mandante presentó un descargo en sede administrativa denunciando su inaplicabilidad, en razón de que se trata de una obra que ha sido contratada por el Estado Nacional, por lo cual no resulta un sujeto pasible de esa gabela.

Añadió que en la nota, se puso de manifiesto que la contribución en cuestión actúa como un impuesto que altera la ecuación económica financiera del contrato y que, por ende, obstruye su cumplimiento, vulnerando la exención establecida en la normativa federal.

Hizo saber que el hecho imponible de la contribución que incide en los contratos de obras públicas, definido en el art. 233 del Código Tributario Municipal, establece que la misma se aplica “por los estudios preliminares, proyectos y vigilancia de obras, certificación de deudas y demás servicios administrativos que la comuna preste en la contratación de obras públicas con





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE SALTA 2

particulares, se abonará la contribución que se establece en el presente título, conforme la alícuota que fije la ordenanza tributaria anual”.

Por otra parte, expresó que el art. 99 de la Ordenanza Municipal N° 33/96 dispone que los derechos de construcción para actividades de tipo industrial deben liquidarse tomando como base imponible el valor del contrato de la obra, previéndose una alícuota del 5%.

En base a ello, afirmó que la pretensión fiscal municipal resulta inconstitucional, dado que la empresa no reviste la calidad de sujeto pasivo de la mencionada contribución, a no existir contratación de obra pública alguna con el municipio, reiterando una vez más, que se trata de una obra pública encomendada por el Estado Nacional, que se integra al denominado “sistema argentino de interconexión de energía eléctrica”.

Acotó que la pretensión de la demandada encubre un impuesto que recae directamente en la actividad de la sociedad y en su rentabilidad, desconociendo las medidas e instrumentos adoptados por el Gobierno Federal en pos del desarrollo energético de nuestro país, en ejercicio de las facultades que le reconoce con carácter exclusivo la Constitución Nacional.

Acto seguido, hizo alusión a los agravios constitucionales que provocan la pretensión fiscal de la Municipalidad. En tal sentido, remarcó que es pacífica y conteste la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia, en cuanto sostiene que si bien la ley 15.336 y sus modificatorias no consagran una inmunidad impositiva absoluta, la exención prevista en el artículo 12 es de carácter objetivo, ya que exime de impuestos y contribuciones a las obras e instalaciones de generación, transformación y transporte de la



energía eléctrica de jurisdicción nacional o la energía generada o transportada a las mismas.

Citó diversos fallos de los tribunales nacionales en apoyo atinentes a la temática. Consideró reunidos los extremos para la procedencia de la acción. Ofreció pruebas. Por último, requirió el dictado de una medida cautelar innovativa, la que fue despachada favorablemente por este Tribunal en fecha 24/08/2020.

II.- Que pese a encontrarse debidamente notificada (cfr. constancias de fs. 142/143 -oficio recepcionado en fecha 26/03/2021-), la parte demandada no contestó el traslado de la demanda, razón por la cual se la declaró en rebeldía y se le dio por decaído el derecho que le asistía para contestarla (cfr. decreto de fecha 05/07/2021 -fs. 146-), lo que le fue notificado en fecha 30/08/2021 (fs. 151). Asimismo, a fs. 155 (29/09/2021) se declaró la causa de puro derecho, proveído que fue notificado a la accionada en fecha 18/10/2021 (fs. 160/161). Finalmente, a fs. 162 se llamó autos para dictar sentencia, providencia que se encuentra firme y consentida.

CONSIDERANDO:

III.- Que ante todo, en el caso bajo examen la Municipalidad de La Merced no contestó el traslado de la demanda y consecuentemente, no cuestionó la legitimación de la actora y su pretensión. Ello, a pesar de estar debidamente notificada, por lo que corresponde tener por ciertos los dichos de la accionante y por válida la documentación acompañada.

En efecto, en virtud de la presunción establecida por el art. 356 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y que en la causa no existe





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE SALTA 2

constancia alguna que se oponga a tales circunstancias, dichos instrumentos habrán de ser tenidos por reconocidos y auténticos. Así, a fin de dilucidar la cuestión planteada, se acudirá a la información y documentación agregada a la causa.

Por otro lado, cabe recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquellos que estimen pertinentes para la solución del caso, ni tampoco ponderar todos los elementos y pruebas aportados al juicio, bastando sólo aquellos que consideren conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos: 294:466; 295:135; 276:132, y 311; entre muchos otros).

IV.- Que sentado lo anterior, cabe mencionar que mediante la presente acción declarativa de certeza, la actora pretende que se declare la ilegitimidad del tributo municipal que la demandada le exige por la obra que desarrolla en ejido municipal, consistente en la construcción de una estación transformadora, en el marco de un contrato celebrado con el Estado Nacional.

Siendo ello así, es dable destacar que de la documentación adjuntada a la causa, se observa que el 27/02/2019 la empresa Rovella Carranza S.A. celebró un contrato con la Secretaría de Provincias y Municipios del Interior, Obras públicas y Vivienda de la Nación, mediante el cual se comprometió a ejecutar la obra LPN N° PFGP-LPN- O “Proyecto Ejecutivo y Construcción de la Estación Transformadora San Agustín 132/33/13,2 KV - Provincia de Salta”.

Por la total y correcta ejecución de la obra, la mencionada Secretaría de Provincias y Municipios del Interior se comprometió a abonar la suma de \$ 222.499.581,39, con impuestos incluidos.



Ahora bien, de esa misma documentación, surge que el 02/07/2019, la Municipalidad de La Merced informó a la firma sobre los requisitos y acciones que debe cumplimentar con motivo de la ejecución de la obra, a saber: 1- solicitud de certificado ambiental; 2- solicitud de habilitación municipal (tasa de actividades varias).

Es así que con fecha 10/07/2019 Rovella Carranza presentó una nota ante el Municipio solicitando la pertinente habilitación para proceder a instalar un obrador de manera transitoria durante el plazo de ejecución de la misma, sin finalidad comercial ni industrial, ni administrativa. Asimismo, en dicha presentación la empresa manifestó que el mentado proyecto de obra pública se encuentra exento de todo tributo local que interfiera en su materialización, en virtud de lo dispuesto por el art. 12° de la ley 15.336.

No obstante, el 03/09/2019 el Municipio demandado emitió un dictamen administrativo notificándole a la empresa que debía ingresar el pago de derecho de construcción, cuyo importe asciende a la suma de \$ 1.112.497,91 correspondiente al 5% del valor del contrato. Para ello, la comuna refirió que la alegada exención no comprende las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local (cfr. la última parte del art. 12° de la ley 15.336), por lo que la empresa estaba alcanzada por la contribución que incide sobre los contratos de obras públicas, prevista en el art. 233 del Código Tributario Municipal.

En virtud de ello, el 16/12/2019 la empresa presentó un descargo planteando la inaplicabilidad e ilegitimidad de la cuestionada tasa municipal, y solicitó que se deje sin efecto cualquier tipo de intimación o acto administrativo tendiente a reclamar el ingreso de esa contribución.





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE SALTA 2

V.- Que a mérito de la reseña que antecede, la cuestión a resolver se circunscribe a analizar: a) la procedencia de la vía intentada por la parte actora; y b) si resulta legítima la pretensión del Municipio demandado de exigir el cobro de la contribución prevista en el art. 233 del Código Tributario Municipal y en el art. 99 de la Ordenanza Municipal N° 33/96.

Con respecto a la primera cuestión, cabe precisar que el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que “Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente declarativa para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, el alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor, y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente”.

Es decir, se trata de una acción que tiende a suprimir un estado de incertidumbre acerca de un derecho o una situación de hecho y jurídica. Su fin, entonces, es remover aquellos que actualmente pone en duda la existencia, eficacia, modalidad, oponibilidad o interpretación de una determinada y concreta relación o estado jurídico.

Por lo tanto, resulta suficiente la incertidumbre de una relación jurídica, de sus modalidades o de su interpretación, puesto que la acción es apta para evitar un eventual perjuicio. Pero ella, no procede a título consultivo ni puede tener por objeto una indagación meramente especulativa, sino que debe sustentarse en un “caso” invocado por el titular de un interés jurídico concreto. De esta forma, no ha de consistir en la interpretación abstracta de una norma jurídica ni en el pronunciamiento respecto de supuestos de hecho solo



hipotéticos (Fallos, 307:1379, 310:606, 311:421, 320:1556; Morelo - Sosa - Berizonce, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación”, Abeledo Perrot, 1992, Tomo IV.A, págs. 401-428).

Entonces, la comprobación de la existencia de un “caso” constituye un recaudo básico e ineludible. Para ello, han de configurarse los siguientes requisitos: a) una actividad administrativa que afecte un interés legítimo; b) un grado de afectación que sea suficientemente directo; y c) que dicha actividad tenga una concreción bastante (Fallos, 307:1379, 325:474, 326:47774, entre otros).

Así, el interesado debe mostrar que los agravios alegados en la acción lo afectan de forma “suficientemente directa”, esto es, que posean “suficiente concreción e inmediatez”, ya que no basta que el titular de un derecho se encuentre incierto sobre el propio derecho, sino que es necesario un acto o hecho exterior objetivo de entidad suficiente para crear una incertidumbre perjudicial objetiva.

En la especie, la falta de certeza de Rovella Carranza radicaría -como ya se adelantó- en determinar si existe legitimidad y potestad por parte de la Municipalidad de La Merced de gravarla con la contribución que incide sobre contratos de obras públicas, por contraponerse ésta -según sus dichos- con normas federales, especialmente con aquellas que regulan el servicio público a nivel federal de generación, transporte, distribución y grandes usuarios de energía eléctrica en el territorio nacional. Concretamente, la empresa demandante sostiene que la pretensión fiscal del Municipio contraviene la





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE SALTA 2

exención fiscal contemplada en el art. 12° de la ley 15.336, la cual resulta plenamente aplicable a la actividad que desarrolla en esa comuna, consistente en la construcción de una estación transformadora, en el marco de un contrato celebrado con el Estado Nacional.

En consecuencia, de los hechos descriptos, puede inferirse que la acción intentada por la empresa demandante responde a un hecho objetivo de entidad suficiente que justifica la existencia de un caso. Ello, toda vez que la Municipalidad de La Merced emitió un dictamen por medio del cual exige el pago de la contribución en cuestión cuyo importe asciende a la suma de \$ 1.112.497,91, correspondiente al valor del contrato.

Por lo tanto, la actividad desplegada por la demandada amerita a considerar que la pretensión de la actora no importa un planteo abstracto o meramente consultivo, sino que, por el contrario, evidencia un “estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica que justifica la promoción de esta demanda y, en consecuencia, configura la presencia de un caso -elemento requerido para este tipo de acciones-, es decir, la existencia de una relación jurídica concreta, cuya controversia y consecuencia derivadas de ella son susceptibles de generar un perjuicio actual al accionante (confr. arg. CNACAF, Sala II, en autos “Tecotex, SACIFIYA c/ EN - M° Agricultura GYP - Reol 18/10 y SAGPYA Resol 91/03 s/ proceso de conocimiento”; Expte. Nro. 46.963/10, del 23/12/14).

De acuerdo a lo expuesto, estimo que la acción preventiva intentada tiene suficiente fundamento para ser utilizada como vía procesal, encontrándose



reunidos los extremos exigidos por el art. 322 del CPCCN, a los fines de la procedencia formal de la acción impetrada por la parte actora.

VI.- Que sentado lo precedente e ingresando particularmente al tratamiento del objeto de la cuestión litigiosa traída a juzgamiento, cabe señalar que según la documentación adjuntada por la actora en su escrito inicial, la debatida contribución se encuentra regulada en el Código Tributario Municipal, específicamente en el Título XVI “Contribución que incide sobre los Contratos de Obras Públicas” (arts. 233 a 237).

Así, el art. 233° prescribe: “Por los estudios preliminares, proyectos, inspección y vigilancia de obras, certificación de deudas y demás servicios administrativos que la comuna presta en la contratación de obras públicas con particulares, se abonará la contribución que se establece en el presente título, conforme a la alícuota que fije la ordenanza tributaria anual”.

Por su parte, el art. 234° establece: “Son contribuyentes las personas que contratan las obras públicas municipales a que se refiere el artículo anterior”. Asimismo, el art. 235° reza que “La base imponible estará constituida por el monto contractual y sus ampliaciones posteriores; mientras que el art. 236° prescribe que “el pago se efectuará en la forma que establezca la Ordenanza Tributaria anual”.

Finalmente, el art. 237° establece: “El Departamento Ejecutivo queda facultado para eximir total o parcialmente del derecho legislado en el presente título a las obras de instalación de redes de agua, u otras similares, que se clasifiquen como de interés social. La declaración y el porcentaje de exención deberán constar en el decreto de llamado a licitación”.





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE SALTA 2

Por otro lado, el art. 99 de la Ordenanza Municipal N° 33/96 dispone que los derechos de construcción para actividades de tipo industrial deben liquidarse tomando como base imponible el valor del contrato de la obra, previéndose una alícuota del 5% (cinco por mil).

En base a esa legislación, habrá que determinar entonces, a los fines de disipar el estado de incertidumbre de la actora, si la norma local que regula la cuestionada contribución deviene aplicable a la obra que está ejecutando la empresa, ya que según los dichos de su representante legal aquella obra se encuentra alcanzada por la exención fiscal prevista en el art. 12° de la ley 15.336. También habrá que determinar si resulta constitucional.

Conforme doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en los autos “Droguería Barracas S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta”, en sentencia del 28/05/2012, resulta “indudable la facultad de las provincias de darse leyes y ordenanzas de impuestos locales y en general, todas las que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el art. 108 (actual 129) de la Constitución Nacional, ya que entre los derechos que constituyen la autonomía de las provincias es primordial el de imponer contribuciones y percibir las sin intervención alguna de autoridad extraña (CSJN, 18/04/1997, “Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de Chascomús”, Fallos 320:619, citando los antecedentes del Fallo 51:349; 114:282; 178:308).

Del mismo modo, el Tribunal Cintero afirmó que “está fuera de cualquier discusión la potestad tributaria de los municipios en virtud de la distribución de



competencias que emerge de la Constitución Nacional (arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional reformada en 1994) al prescribir que cada provincia asegure el régimen y autonomía municipal, mediante una regulación relativa a su alcance y contenido, en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero” (cfr. “Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/ Municipalidad de General Mosconi”, sentencia del 08/10/96).

Por otra parte, destacó que “el poder de policía local posee una amplia gama de materias que vienen instituidas constitucionalmente conforme el principio de las facultades reservadas del art. 126 de la Constitución Nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando a Joaquín V. González, señaló que el régimen municipal que los constituyentes reconocieron como esencial base de la política argentina al consagrarlo como requisito de la autonomía provincial (art. 5º) consiste en la administración de aquellas materias que conciernen únicamente a los habitantes de un distrito o lugar particular sin que afecte directamente a la Nación en su conjunto y, por lo tanto, debe estar investido de la capacidad necesaria para fijar las normas de buena vecindad, ornato, higiene, vialidad, moralidad, etc. de la Comuna y del poder de preceptuar sanciones correccionales para las infracciones de las mismas” (CSJN en el fallo citado precedentemente del 18/04/1997 “Telefónica de Argentina c/ Municipalidad de Chascomús”).

Por ello, debe descartarse que resulte inconstitucional la facultad del municipio demandado de fijar tributos locales. Sin embargo, corresponde analizar ahora si la cuestionada contribución colisiona con la exención fiscal expresamente prevista en el art. 12º de la ley 15.336. Dicho de otro modo, debe





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE SALTA 2

analizarse si el municipio tiene la potestad de exigir algún tipo de tasa y/o contribución en torno a la obra que ejecuta la empresa demandante.

En ese orden de ideas, cabe destacar en primer lugar que el Congreso de la Nación dictó las leyes nros. 15.336 y 24.065 a fin de planificar, establecer las pautas y ordenar la política energética en un marco de regulación federal incorporado a los contenidos del art. 75 inc. 13 de la Constitución Nacional (Fallos 320:1302).

En lo que aquí respecta y se plantea, el art. 12° de la ley 15.336, en su primera parte, establece expresamente que “Las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. Acto seguido, establece: “No se comprende en esta exención las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local”.

El Alto Tribunal tiene dicho que el artículo precedente no consagró una inmunidad absoluta pero que tal criterio resulta -por otro lado- compatible con lo dispuesto por el art. 75 inc. 30 de la Constitución Nacional que establece como facultad del Congreso legislar “para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional”, aunque respetando el poder de policía e imposición local en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines (Fallos 296:253; 308:2554; 322:2624).

Ahora bien, no puede soslayarse que la propia norma federal excluye de la pretendida exención a las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local. De esa manera, no se advierte que pueda existir una colisión con la



potestad que tiene el municipio demandado de exigir algún tipo de tasa y/o contribución en torno a la obra que ejecuta la empresa demandante, ya que esa facultad se la confiere expresamente la misma ley nacional.

De hecho, como se mencionó en los antecedentes, la Municipalidad de La Merced no desconoció la exención prevista en el art. 12° de la ley 15.336, sino que a la hora de exigir el pago del cuestionado tributo, basó su reclamo en la facultad que le otorga esa misma norma.

VII.- Que sin embargo, los últimos interrogantes a responder, y por cierto los más importantes, se vinculan a determinar si la contribución regulada por el art. 233 del Código Tributario Municipal, resulta aplicable a la obra que ejecuta la empresa en el éjido municipal; y si la Municipalidad de La Merced ha cumplido con la prestación de los servicios que constituye el hecho imponible y que daría sustento a la percepción de la contribución reclamada por el Municipio.

Respecto al primer interrogante, la respuesta será negativa. En efecto, como se vio más arriba, la contribución regulada en el art. 233 del Código Tributario Municipal circunscribe el hecho imponible del gravamen a los servicios administrativos que la comuna presta en la contratación de obras públicas con particulares, definiendo como contribuyentes a las personas que contratan obras públicas municipales.

Por ello, cabe afirmar sin ninguna hesitación que el tributo que nos ocupa resulta inaplicable para la actividad específica que desarrolla la actora. Ello, por cuanto si se analiza el contrato celebrado por la empresa con la Secretaría de





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE SALTA 2

Provincias y Municipios del Interior, se observa que no se trata de un supuesto alcanzado por la cuestionada contribución.

Repárese que estamos en presencia de una obra que abona, contrata y supervisa el Estado Nacional, por lo cual el municipio mal podría realizar los estudios preliminares, proyectos, inspecciones y demás servicios que menciona dicha norma, ya que no es la parte que contrató la obra pública. De la propia letra del art. 233, se puede advertir que el legislador local creó la contribución que aquí se cuestiona para retribuir los servicios que ese Municipio brinda al momento de contratar con empresas prestadoras de servicios públicos.

En otras palabras, la obra que se intenta gravar no es producto de un contrato que la firma accionante haya celebrado con la Municipalidad, razón por la cual Rovella Carranza no resulta ser sujeto pasivo del gravamen regulado en el art. 233 del Código Tributario Municipal.

Sin perjuicio de lo anterior, y aun suponiendo que la contribución resulte aplicable al caso concreto, es dable señalar que en el expediente no hay constancias que acrediten que la empresa efectivamente recibió los servicios detallados en esa norma (art. 233), por los cuales el Municipio podría reclamar el cuestionado tributo.

En ese sentido, por aplicación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, ante la alegación por parte del administrado de la no prestación de un servicio, es el Estado (la Municipalidad demandada en el caso) quien tiene la carga de la prueba respectiva, por ser quien se encuentra en mejores condiciones para acreditarlos (Spisso, Rodolfo R.: “Derecho Constitucional Tributario”, Bs. As., LexisNexis, 2007, pág. 46; TSJ de la Ciudad de Buenos



Aires, voto de los doctores casás y Lozano, 20-2-08, “central Puerto S.A. vs. GCBA”, E.D. 226-713, citado por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en los autos “Droguería Barracas S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta”, en sentencia del 28/05/2012). Por ello, la omisión en hacerlo sólo a ella perjudica en cuanto no se puede tener por brindados otros servicios que no sean los que se han demostrado en la causa. La carga de la prueba, dice Fassi siguiendo a Devis Echandía, es una noción procesal que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no se encuentran en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos para evitarse las consecuencias desfavorables (Devis Echandía: “teoría General de la Prueba”, tomo I, pág. 426; Couture: “Fundamentos del derecho Procesal Civil”, Bs. As., Depalma, 1972, pág. 209/214; Reimundín: “Derecho Procesal Civil”, Bs. As., Viracocha, t. I, 1957, pág. 127/132; C.Apel. CC. Salta, Sala III, año 1999, fº 27; todos ellos citados por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en los autos “Droguería Barracas S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta”, en sentencia del 28/05/2012).

Sobre el tema de la carga de la prueba, el postulado que rige es que la falta de prueba se vuelve en contra de la parte que tenía la tarea de hacerlo, quien por tal omisión, no logrará el progreso de su pretensión o defensa (cfr. Cámara Federal de Apelaciones de Salta en los autos “Droguería Barracas S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Salta”, sentencia del 28/05/2012).





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE SALTA 2

Cabe advertir además, que la imposición de tasas presupone la existencia de un requisito fundamental como es que a su debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio al contribuyente, debiendo guardar con el costo del servicio público efectivamente prestado por la comuna (CJSalta, en L.L., 1998-D, 859 (40.577-S) - LLNOA, 1998-899).

En igual sentido, destaca Bidart Campos (manual de la Constitución Reformada -Ediar, Buenos Aires, año 1997, Tomo II, pág. 158) que la tasa es la prestación que se paga en virtud de un servicio público aprovechado, de modo que hay también, como en la contribución, un beneficio recibido por el contribuyente, a diferencia del impuesto, en el que no se da relación alguna con servicios o enriquecimiento proveniente de una actividad estatal.

Ello así, por cuanto las tasas, como especie dentro del género tributo, constituyen prestaciones pecuniarias coactivas que el estado exige como retribución de servicios públicos divisibles, vale decir, concretos o particularizados en el sujeto pasivo.

Incluso, la Provincia de Salta ha establecido tal requisito en su propia constitución, al disponer en el último párrafo del art. 67 que “Las tasas retributivas de servicios exigen su efectiva prestación”.

En otras palabras, para que su hecho imponible se configure debe realizarse necesariamente una especial actividad por parte del Municipio consistente en un servicio vinculado directamente con el sujeto obligado, que sirva de causa o fundamento al pago que se exige en contraprestación (García Vizcaino, Catalina, “Derecho Tributario”, 4ta. Edición actualizada y ampliada, Abeledo Perrot, Bs. As., 2009, p. 98).



Y esto último, no es desvirtuado por la denominación que el Código Tributario Municipal le dé al gravamen en cuestión -contribución-, ya que lo relevante es la esencia del mismo sobre cualquier ropaje jurídico que pretenda asignársele (cfr. Ataliba Geraldo, Hipótesis de Incidencia Tributaria, tercera parte, capítulo II, punto 55, nomen iuris, pág. 122 y ss., 5ta. Ed. Maldeiros Editores SA, 1992; Galarza El C., El nomen iuris en los institutos tributarios, en especial las tasas, en Tasas Municipales, tomo I, pág. 125, punto 3.2, y ss.).

En definitiva, la Municipalidad de La Merced no se presentó al proceso y por ende tampoco probó la efectiva prestación de los servicios detallados en el art. 233 del Código Tributario Municipal, por los cuales podría reclamar el cuestionado tributo.

Así, a mérito de los fundamentos expuestos en este último punto, corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda iniciada por Rovella Carranza S.A. en contra de la Municipalidad de La Merced, y en consecuencia declarar inaplicable a la parte actora la contribución que incide sobre los contratos de obras públicas -regulada en el art. 233 del Código Tributario Municipal y en el art. 99 de la Ordenanza Municipal N° 33/96- a la actividad que desarrolla la firma en el éjido municipal, que consiste en la construcción de una estación transformadora, cuya ejecución le fuera encomendada por el Estado Nacional, mediante la suscripción del contrato celebrado el 27 de febrero de 2019.

VIII.- Que en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la demandada, en virtud del criterio objetivo de la derrota y a la forma en que se resuelve (art. 68 del CPCCN).





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE SALTA 2

Por todo ello,

RESUELVO:

I.- HACER LUGAR parcialmente a la demanda iniciada por Rovella Carranza S.A. en contra de la Municipalidad de La Merced, y en consecuencia declarar inaplicable a la parte actora la contribución que incide sobre los contratos de obras públicas -regulada en el art. 233 del Código Tributario Municipal y en el art. 99 de la Ordenanza Municipal N° 33/96- a la actividad que desarrolla la firma en el éjido municipal, que consiste en la construcción de una estación transformadora, cuya ejecución le fuera encomendada por el Estado Nacional, mediante la suscripción del contrato celebrado el 27 de febrero de 2019.

II.- IMPONER LAS COSTAS a la demandada vencida, de conformidad a lo dispuesto en el último punto de los considerandos.

III.- RESERVAR la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.

IV.- MANDAR se copie, registre y notifique.-

jcz





#34799789#339330336#20220829093138609